



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE:	Ángel Santo Suárez Carrascal
DEMANDADA:	Colpensiones y Porvenir S.A.
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Confirma y adiciona
Radicado	05001-31-05-002-2022-00209-01 <a href="#">(014) 05001310500220220020901</a>

Medellín, a los catorce (14) días de junio de dos mil veintitrés (2023).

La **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **Luz Amparo Gómez Aristizábal**, **María Eugenia Gómez Velásquez**, y **Claudia Angélica Martínez Castillo**, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación de Porvenir SA así como el grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de Colpensiones, en el proceso ordinario laboral adelantado por el señor **Ángel Santo Suárez Carrascal** en contra de **Colpensiones** y de **Porvenir S.A.**, frente a la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín.

Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA.

I. ANTECEDENTES:

1.1 PRETENSIONES.

El señor Ángel Santo Suárez Carrascal presentó demanda en contra de Colpensiones y Porvenir S.A. buscando se declare la nulidad y/o ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS), disponiendo la reactivación automática de su vinculación al Régimen de Prima Media (en adelante RPM); que se

condene a Porvenir S.A. a trasladar a Colpensiones todos los aportes, rendimiento y cuotas de administración de su cuenta de ahorro individual, bono pensional; y las costas del proceso.

## **1.2 HECHOS.**

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 1 de octubre de 1959; que se afilió al RPM en el mes de diciembre de 1995; que se trasladó al RAIS administrado por Horizonte SA hoy Porvenir S.A. en febrero de 1996; sin embargo, aduce que la entidad no le brindó la debida información acerca de las implicaciones de su traslado.

## **1.3 CONTESTACIÓN DEMANDADAS.**

Admitida la demanda e integrada la litis, las demandadas allegaron respuesta oportuna, así:

**Porvenir S.A.** señaló que no consta de la edad del actor, el agotamiento de la reclamación administrativa en dos oportunidades, ni las proyecciones de la mesa pensional en ambos regímenes; y negó la forma en que relató su afiliación al RAIS y los hechos que hablan de una indebida información. Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones de: prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, y compensación.

**Colpensiones** aceptó la fecha de nacimiento y edad del actor, el agotamiento de la reclamación administrativa en dos oportunidades; de los demás hechos, dijo que no le constan por ser situaciones ajenas a la entidad; oponiéndose a las pretensiones dirigidas en su contra y proponiendo las excepciones de carga dinámica de la prueba, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, improcedencia para decretar la ineficacia del traslado de régimen o inexistencia de la obligación, improcedencia de intereses moratorios, inexistencia de vicio en el consentimiento, devolución de cuotas de administración – seguros previsionales-comisiones indexados, prescripción, imposibilidad de condena en costas, y compensación.

## **1.4 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 26 de enero de 2023, fundamentó su decisión en que de conformidad con el art. 48 de la CN, y de los arts. 13 y 271 de la ley 100 de 1993 y para el año 1996 que fue la primera afiliación al régimen de pensiones el demandante tenía ese derecho que no fue garantizado con el deber de información, y que para la declaratoria de ineficacia no es obligación que la primera afiliación del demandante sea al RPM, sino que pudo haber sido al RAIS, siendo la misma consecuencia ya que el actor en la demanda declaró que su intención es estar afiliado a Colpensiones. Y quedó demostrado con la declaración del demandante que nadie lo asesoró al momento de su afiliación. En consecuencia, dispuso:

**PRIMERO:** Se DECLARA la INEFICACIA de afiliación del demandante al al Régimen de Ahorro individual con Solidaridad del señor ANGEL SANTO SUAREZ CARRASCAL identificado con cédula de ciudadanía No. 3.671.726.

**SEGUNDO:** Se CONDENA a PORVENIR S.A, a trasladar a ANGEL SANTO SUAREZ CARRASCAL al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES, trasladando a dicha entidad dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual junto con sus rendimientos. De igual modo, la citada AFP deberá devolver a COLPENSIONES el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, aportes al fondo de solidaridad de haberse generado, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, en virtud de lo dispuesto en el art. 2.2.2.4.8. del decreto 1833 de 2016, durante todo el tiempo que permaneció afiliado a dicha entidad.

**TERCERO:** Se ORDENA a COLPENSIONES, a reactivar la afiliación del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida que administra, sin solución de continuidad y recibir todos los dineros que le sean trasladados por la administradora demandada, realizando la respectiva actualización de la historia laboral.

**CUARTO:** Se DECLARAN no probadas las excepciones de mérito por lo expuesto en las consideraciones.

**QUINTO:** Se CONDENA en costas y agencias en derecho a PORVENIR S.A, mismas que se liquidarán en el momento procesal oportuno, de conformidad con lo establecido en los arts. 365 y 366 del CGP y el acuerdo PSAA16-10554 del CSJ. Sin costas a cargo de COLPENSIONES.

## 1.5 RECURSO DE APELACIÓN.

**Porvenir S.A.** interpuso recurso, argumentando que de acuerdo a las probanzas allegadas por Colpensiones en el folio 25 archivo 010 Repuesta Colpensiones, registra sin afiliación a Colpensiones y del interrogatorio practicado al demandante, y en la página 28 del archivo 03 Demanda y anexos, se evidencia que nunca estuvo afiliado al RPM sino que su primera afiliación fue al RAIS; y que no puede haber afiliaciones retroactivas al sistema y de declararse no puede ser una distinta a la fecha de la sentencia.

En caso de confirmarse la decisión, solicita no se condene al traslado de los gastos de administración, seguros previsionales, y porcentaje al Fondo de garantía de pensión mínima, indexadas, pues, en primer lugar frente a los gastos de administración, son sumas destinadas a generar los rendimientos que hoy se reflejan en la cuenta de ahorro del afiliado; en cuanto a los seguros previsionales, se destinaron a un tercero que es la aseguradora, y ya no están en el patrimonio de Porvenir y con ellos se cubrieron todas las contingencias de invalidez y muerte.

## **2. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA**

**Porvenir** reitera los argumentos expuestos en primera instancia, y señala que el acto jurídico celebrado entre las partes produjo los efectos jurídicos que las partes pretendían. En el evento de considerar que “la falta al deber de información” constituye una causal estructural para que el traslado de régimen pensional no produzca efectos jurídicos, en aplicación del principio de la congruencia de los fallos judiciales, no se puede ordenar la devolución de los rendimientos financiero que los aportes de la parte demandante produjeron en el RAIS por cuando no se alegó ni menos probó la mala fe de mi presentada, por lo que solo se deberá trasladar a PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES los rendimientos equivalentes del RAIS.

## **3. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

### **3.1 PRESUPUESTOS PROCESALES Y ALCANCE DEL RECURSO**

Conoce la Sala del recurso de apelación y de la consulta de la sentencia a favor de Colpensiones de conformidad con lo señalado en los artículos 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

### **3.2 PROBLEMA JURÍDICO**

Esta Sala analizará, si se declara la ineficacia de la afiliación del demandante Ángel Santo Suárez Carrascal al RAIS, con el consecuente traslado al RPMPD administrado por Colpensiones, y, si es así, establecerá sus consecuencias.

### **3.3 HECHOS RELEVANTES PROBADOS**

De acuerdo con el acervo probatorio arrimado, no hay duda que el demandante nació el 1 de octubre de 1959 como se observa en su cédula de ciudadanía (folio 13 archivo 003 Demanda y anexos), y se afilió al RAIS administrado por Horizonte hoy Porvenir S.A. suscribiendo solicitud de vinculación el 12 de febrero de 1996 (folio 77 archivo 09 Contestación Porvenir).

### **3.4 INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.**

El primer aspecto es recordar que, según el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la selección de cualquiera de los regímenes previstos en el literal a) de esa disposición es libre y voluntaria, de manera que, cuando un empleador o cualquier persona natural o jurídica, desconozca ese derecho, sea acreedor a las sanciones del inciso 1° del artículo 271 de la misma ley, de acuerdo con ella, cualquier persona que atente contra el derecho del trabajador a su afiliación, traerá como consecuencia que la afiliación quedará sin efecto.

Lo segundo es que, aunque la afiliación es libre y voluntaria, las administradoras de pensiones están compelidas a cumplir con el deber de información, de modo que la decisión de traslado esté precedida del cumplimiento de ese mandato.

Ahora, según el artículo 97, numeral 1.o del Decreto 663 de 1993, las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar información necesaria y transparente a los

afiliados, «de suerte que les permita, mediante elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y tomar decisiones informadas».

Por información necesaria, la Sala de Casación Laboral ha afirmado que comprende:

(...)la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones», y respecto a la transparencia, ha explicado que implica la obligación de dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, «los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios» (CSJ SL1452-2019, reiterada en SL1688-2019 y SL1689-2019).

El fondo de pensiones es responsable de proporcionar e indicar al usuario que pretende vincularse al régimen, los elementos determinantes para tomar una decisión informada. En ese orden, la vinculación y/o afiliación no surte efectos cuando se le oculta información o no se le brinda en forma completa, porque en ese caso no existe una decisión verdaderamente libre y voluntaria, ya que la determinación de escogencia de régimen pensional puede variar según la información que se brinde (sentencias CSJ SL373-2021 MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo; CSJ SL12136-2014 MP Elsy del Pilar Cuello Calderón y CSJ SL17595-2017 sentencia de instancia)

Por lo tanto, no es posible evidenciar un verdadero consentimiento informado en quien carece de los elementos suficientes para adoptar una decisión adecuada a sus circunstancias particulares, de manera que es insuficiente afirmar que el afiliado expresó su voluntad al permanecer en el RAIS y que su vinculación conserva validez, cuando la administradora incumplió la obligación de brindarle la información necesaria, en obediencia a lo establecido en los artículos 2 y 12 del Decreto 663 de 1993.

Así, cuando el afiliado alega la falta de información o la mala entrega de esta por parte de la AFP, como ocurre en este caso, la administradora tiene sobre sí la carga de demostrar el cumplimiento de esa obligación, por cuanto: «*la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo*» (artículo 1604 CC).

De tal manera que, al haberse indicado por el actor que «*no recibió la información*», por tratarse de una negación indefinida, lo releva de probar ese hecho y a su vez, traslada la carga de la prueba en el demandado, quien deberá probar en contrario, es

decir, que sí proporcionó la información completa y suficiente, en las etapas preparatorias y previas a la afiliación o vinculación al régimen pensional.

Así, se reitera que la carga de la prueba, sin importar la circunstancia particular del afiliado, está a cargo de las AFP, toda vez que: (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento, y (iii) no es razonable invertir la carga de la prueba en contra de la otra parte de la relación contractual, ya que las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia respecto al afiliado lego (CSJ SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019 y SL4426-2019).

En ese orden, la constatación de que se cumplió con el deber de información es ineludible, por lo que la simple firma del formulario de afiliación es insuficiente para acreditar el consentimiento informado del afiliado. Este es el criterio postulado por la CSJ en su Sala Laboral, en la sentencia SL19447-2017:

*el acto de afiliación o traslado de régimen pensional debe estar acompañado de la decisión libre y voluntaria del afiliado, la cual no se limita a la simple manifestación de quien decide trasladarse, sino que debe ajustarse a los parámetros de libertad informada, es decir, la solicitud y trámite de traslado de régimen pensional, debe estar precedida de una información clara, comprensible y suficiente, sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea» (CSJ SL7561-2021, CSJ SL5595-2021, CSJ3719-2021),*

Ahora, el hecho de que el afiliado hubiese suscrito el formulario de vinculación o que en el mismo se empleen leyendas o afirmaciones tales como que «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares que suelen consignarse en los formatos preimpresos, no liberan a las AFP de su obligación de cumplir de manera rigurosa y de buena fe su deber de información. A lo sumo, estas expresiones sirven para acreditar un consentimiento sin vicios, pero no uno debidamente informado (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020).

Se insiste, que las AFP cumplan el deber de información y su acreditación en el proceso no se puede demostrar con las simples manifestaciones genéricas del afiliado de aceptar las condiciones del traslado, pues ellas son insuficientes ya que quien debía probar la diligencia y cuidado era quien estaba obligado a emplearla, en este caso la administradora del fondo pensional (CSJ SL4964-2018).

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de Pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, era Porvenir S.A. quien debía probar en el proceso que brindó una asesoría personalizada y completa al demandante al momento de su vinculación, analizando las circunstancias particulares de su caso.

Y, es que las AFP desde su creación, tienen el deber, de suministrar información objetiva, comparada y transparente sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, como de ello da cuenta el artículo 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, en armonía con el artículo 13, literal b) de la Ley 100 de 1993 (CSJ: SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL3464-2019, SL4360-2019, SL2611-2020, SL4806-2020 y SL373-2021).

Deben informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del SMLMV a la fecha de expedición de la L.100/93, actualizado con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), debe seguir cotizando, si es o no beneficiario del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de traslado de régimen pensional, para que la misma sea realmente libre y voluntaria.

Y es que debe reiterarse que, la labor del funcionario del fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “*deber del buen consejo*”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, en la medida



que es responsabilidad de dichas administradoras y de sus promotores, velar por la información suministrada a sus usuarios -art. 10 D.720/94- por el cual se reglamentaron los artículos 105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, si bien Porvenir S.A. afirmó al contestar la demanda que al actor se le brindó la asesoría requerida para el caso (archivo 09 carpeta 1), de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita, tenía la carga de acreditarlo, sin embargo, no aportó prueba que dé cuenta de la información realmente suministrada al demandante en ese momento, adicional que, como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de **la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado de régimen pensional**, y no con posterioridad a aquel.

Ahora bien, aun cuando se encuentre en discusión la ineficacia de la afiliación inicial al RPM y que no se está pretendiendo un traslado de régimen, no puede desconocerse que el derecho a la pensión está amparado en el marco de la seguridad social como derecho de protección constitucional, y con conexidad al derecho fundamental al trabajo, como se ha señalado por vía de la jurisprudencia constitucional en sentencias como la T-398 de 2013:

Su finalidad directa es garantizar la concreción de los derechos fundamentales de las personas traducidos en la dignidad humana, el mínimo vital, la seguridad social y la vida digna. El derecho a la pensión tiene conexidad directa con el derecho fundamental al trabajo, en virtud de la amplia protección que de acuerdo a los postulados constitucionales y del Estado Social de Derecho se debe brindar al trabajo humano en todas sus formas. Se asegura entonces un descanso “remunerado” y “digno”, fruto del esfuerzo prolongado durante años de trabajo, cuando en la productividad laboral se ha generado una notable disminución. Asimismo, el artículo 48 de la Carta Política establece el régimen de seguridad social, dentro del cual se encuentra el reconocimiento del sistema pensional, y en éste la pensión de vejez. Resulta claro, entonces que cuando se acredita el cumplimiento de estos requisitos consagrados en la ley, la persona se hace acreedora de la obtención de la pensión de vejez, la cual se encuentra en consonancia con el derecho a la seguridad social.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió uno de los presupuestos para la eficacia del acto de vinculación de régimen pensional, esto es, el deber de información, cuya ausencia, dada su incidencia en el derecho pensional, trae como consecuencia la declaración de ineficacia de la afiliación al régimen pensional, que conlleva a que la situación del demandante retorne a su estado anterior, siendo claro, que el actor antes del 12 de febrero de 1996, no se encontraba afiliado a ningún régimen pensional, sin embargo, conforme a lo señalado en el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, que exige la obligación de afiliación al Sistema General de Pensiones cuando existe

un vínculo contractual y, al declararse la ineficacia de la afiliación del actor al régimen de ahorro individual, y ante la manifestación de la voluntad del demandante de selección del régimen de prima media con prestación definida, como su régimen pensional hoy administrado por COLPENSIONES; corroborada con la solicitud de traslado a COLPENSIONES y negada (folio 96 archivo 10), y en el acápite de pretensiones, ratifica dicha escogencia.

De lo anterior, esta Sala concluye que la intención del actor es que Colpensiones sea su administradora de pensiones, debiendo recibirla y activar su afiliación desde febrero de 1996, en armonía con el artículo 271 de la L.100/93, antes citado, que dispone que ante una situación que atente contra los derechos del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, la afiliación quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. Razón por la que en este punto se confirmará la decisión.

### **3.5 CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DE LA VINCULACIÓN Y/O AFILIACIÓN.**

La declaratoria de ineficacia de vinculación de la demandante al RAIS implica que **todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante**; por lo que es legítimo que Porvenir S.A., traslade a Colpensiones no solo el saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, sino también, los porcentajes destinados a gastos de administración, primas de seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados, como ha determinado la jurisprudencia uniforme de nuestro órgano de cierre jurisdiccional desde la sentencia con Rad 31989 del 9 de sept/08, M.P. Eduardo López Villegas, reiterada en las SL 4989 y 4964 del 14 de nov/18, radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, SL 1688 del 8 mayo/19, SL 2877 del 29/07/2020, Rad. 78667, M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo, SL 3034 Rad. 86961 del 07/07/2021; 3571 Rad. 88476 del 04/08/2021; 3708 Rad 88556 del 18/08/2021; 3709 Rad. 88875 y 3710 Rad. 88550 del 18/08/2021; 3769 Rad, 84296 del 11/08/2021, SL755 Rad 90519, SL756 Rad 90548 del 09/03/2022 y SL1019 Rad 87915 del 16/03/2022, M.P

Luis Benedicto Herrera Díaz; y SL843 Rad 85499 del 16/03/2022 M.P Gerardo Botero Zuluaga.

Según el grado jurisdiccional de consulta favorable a Colpensiones, la Sala adicionará el fallo de primer grado para disponer que el traslado de los recursos que realicen los fondos privados deberá hacerse en el término de 30 días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones-, esto es, entregando la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada período cotizado, especificando cada valor, *“...junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen ...”*.

### **3.6 PRESCRIPCIÓN**

No se llama a prosperar la excepción de prescripción por cuanto la acción sobre la vinculación y/o afiliación al régimen pensional guarda relación inescindible con los requisitos y valor de la pensión, por lo que se debe predicar la imprescriptibilidad de la acción, ver al respecto Sentencia SL-1421 de 2019, Radicado No. 56174 de 10 de abril de 2019.

En efecto, de manera reiterada y pacífica, la SCL de la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que de ello surjan.

Conforme con las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia revisada en apelación y consulta se adicionará y confirmará en todo lo demás.

Costas de segunda instancia a cargo de Porvenir SA y en favor del demandante por no prosperar el recurso de apelación. Las agencias en derecho se fijan en \$1.160.000 pesos.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**IV. RESUELVE**

**PRIMERO: Adicionar** el numeral **Segundo** de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, el 26 de enero de 2023, ordenándose que la obligación de traslado impuesta a **Porvenir S.A.** deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, entregando la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, según las consideraciones de esta sentencia.

**SEGUNDO: Confirmar** en lo demás la sentencia revisada en apelación y consulta.

**TERCERO:** Costas de segunda instancia a cargo de Porvenir SA y en favor del demandante por no prosperar el recurso de apelación. Las agencias en derecho se fijan en \$1.160.000 pesos.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,

  
CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO

  
LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL

  
MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ